



## Comunidad de Madrid

### INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DENOMINADO “SERVICIO DE CUSTODIA, ARCHIVO Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

Mediante los Reales Decretos 600/2002, de 1 de julio, y 1429/2002, de 27 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia se produce el traspaso de competencias a esta Administración Autonómica en materia de Justicia. En el momento del traspaso se asumen por la Comunidad de Madrid los documentos generados por los órganos judiciales radicados en el ámbito territorial madrileño, incluidos los 21 Partidos Judiciales y sus Registros Civiles, así como del resto de instalaciones y fondos.

La situación de los archivos judiciales en aquel momento era ya de saturación, tanto en los propios juzgados como en los depósitos supletorios que se habían habilitado y con un volumen muy importante de documentos ya en custodia externa. El volumen recibido en aquel momento fue de unos 76 kilómetros lineales de documentos, de los cuales, al menos 25 kilómetros estaban ya en custodia externa con una empresa.

Asimismo, el crecimiento exponencial de documentos desde 2002 a 2021 -el crecimiento anual medio de los últimos años ha sido de 15.500 metros lineales- ha provocado que se tuviera que recurrir a la custodia externa de los mismos. En este sentido, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia se van a realizar una serie de actuaciones a partir de 2021 con el objetivo de reducir el volumen de la custodia externa, fundamentalmente mediante el expurgo de documentación y el establecimiento de unas directrices en la remisión de documentos por parte de los órganos judiciales a dicha custodia externa. Por ello, se va a iniciar la sistematización de las labores de expurgo de documentación judicial de la Comunidad de Madrid, considerando la necesidad urgente de eliminación de todos aquellos procedimientos en los que haya terminado la ejecución o en los que se hubiese dictado una resolución que declare la prescripción o la caducidad.

Los problemas que actualmente genera la acumulación de legajos y documentos y el coste económico de los mismos, hacen necesaria la adopción de medidas de reducción de esta documentación, de acuerdo con la normativa de aplicación y de disminución del gasto que mensualmente genera la custodia externa, alineándonos con políticas archivísticas racionales, sobre la base de las directrices de papel cero en las Administraciones Públicas.

El desarrollo de las labores de expurgo se realizará de acuerdo con las directrices marcadas por la Junta de Expurgo de la Documentación Judicial de la Comunidad de Madrid, constituida mediante Orden de 10 de julio de 2012 (BOCM de 20 de julio de 2012) y en coordinación con la Administración de Justicia, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones



## Comunidad de Madrid

con la Administración de Justicia, con el fin de valorar la implantación de un sistema integrado y permanente que permita reducir el volumen de papel que contienen los archivos, tanto en custodia externa como interna, todo ello dentro del ámbito del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales.

La necesidad de celebración de este contrato deriva de la imposibilidad de proceder al archivo de la citada documentación en las correspondientes sedes judiciales por falta de espacio, dado el gran número de órganos judiciales en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.

La prestación de este servicio, se considera absolutamente imprescindible para el normal funcionamiento de los órganos de la Administración de Justicia madrileña, dadas las limitaciones físicas existentes en los inmuebles que en la actualidad albergan a los Juzgados y Tribunales madrileños y a las ingentes cantidades de documentación generada por los órganos de una planta judicial que en la actualidad está integrada por un total de 528 órganos judiciales y que además se encuentra sobresaturada de asuntos que atender por reparto, siendo esta situación especialmente gravosa en la actualidad dada la situación generalizada de crisis económica que tiene un especial impacto en ciertas jurisdicciones como la Mercantil o la Social, sin desdeñar a la Civil o a la Penal.

Los servicios se prestarán en un período de 36 meses, a partir del 1 de octubre de 2022, o a partir del día siguiente a la formalización del contrato si ésta fuera posterior, prorrogables por 24 meses más, por un importe total de 6.830.804,53 euros (5.645.293,00 euros de base imponible más 1.185.511,53 euros correspondientes al 21% de IVA), cuyo desglose por anualidades es el siguiente:

Anualidad	Base imponible	IVA	Importe total
2022	348.450,50	73.174,60	421.625,10
2023	1.832.065,00	384.733,65	2.216.798,65
2024	1.894.016,00	397.743,36	2.291.759,36
2025	1.570.761,50	329.859,92	1.900.621,42
<b>TOTAL</b>	<b>5.645.293,00</b>	<b>1.185.511,53</b>	<b>6.830.804,53</b>

Madrid, a fecha de firma  
LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Firmado digitalmente por: ALONSO BERNAL ALEJANDRA  
Fecha: 2022 07 22 13:14

Alejandra Alonso Bernal